

El problema inmediato que enfrentan quienes hoy propugnan una democracia inclusiva es la concepción de una estrategia de transición que conduzca a un estado en el que el proyecto democrático pase a ser el paradigma social dominante. En este capítulo, se propone una estrategia política y económica que creará una estructura institucional para una democracia inclusiva. Esta estrategia supone un nuevo tipo de política y un cambio paralelo que gradualmente vaya situando los recursos económicos (mano de obra, capital, tierra) fuera de la economía de mercado.

En la primera parte del capítulo, se evalúan dos estrategias radicales para el cambio social: la estrategia del estilo de vida y una variación de ésta, que intenta hacer una síntesis de la ecología profunda y del enfoque de la sociedad civil. Luego, se propone una estrategia de transición hacia una democracia confederal que supone la participación directa en el campo político y social de una manera que no crea incompatibilidad entre la finalidad de una democracia inclusiva y los medios para lograrla. En el apartado siguiente se propone un nuevo tipo de organización política, que, nuevamente, tiene como objetivo respetar el criterio de la compatibilidad de los medios y los fines. En el último apartado se propone un amplio programa de transformación social.

En la segunda parte del capítulo, se explora una estrategia económica para la transición a la democracia económica. Tomando como base la discusión planteada en el capítulo anterior, este apartado se estructura en torno a los pasos que hay que dar en la transición para crear las condiciones previas para la democracia económica. Así, a la discusión de las medidas que pueden tomarse para aumentar la independencia le siguen las propuestas acerca de la transición a una economía 'démica' y a una asignación de recursos confederal.

El punto en el que se hace especial hincapié en este capítulo es el de que todas las estrategias propuestas para el cambio político y económico y los proyectos de transición que implican no sirven de nada si no forman parte de un amplio programa de transformación social que tenga como objetivo expreso la sustitución de la economía de mercado y la democracia estatista por una democracia inclusiva.

Un nuevo tipo de política

La vieja política está condenada, ya que la acelerada internacionalización de la economía de mercado se cumple con la decadencia continua de la 'democracia' representativa. La impotencia del Estado para controlar eficazmente las fuerzas del mercado, a fin de resolver los problemas fundamentales del desempleo masivo, la pobreza, la creciente concentración del ingreso y la riqueza y la permanente destrucción del medio ambiente, ha

llevado a una apatía política y un cinismo masivo, en especial en las clases bajas y los marginados. En consecuencia, todos los partidos compiten hoy por el voto de la 'sociedad del 40 por ciento' que, efectivamente, determina el proceso político.

Al mismo tiempo, también están condenados los planes infundados de algunos sectores de la 'izquierda' de democratizar la sociedad civil. A la internacionalización de la economía de mercado le ha seguido inevitablemente la internacionalización de la sociedad civil. En otras palabras, la competencia impone normas totalmente disímiles en lo que a controles sociales y ecológicos de los mercados se refiere. Por lo tanto, ese tipo de sociedad civil está obligada a predominar, lo que concuerda con el grado de mercantilización que caracteriza a las partes más competitivas de la economía mundial.

El 'cul-de-sac' de las estrategias relativas al estilo de vida

Dejando de lado las estrategias de cambio social que dan por sentada la estructura institucional existente de economía de mercado y democracia liberal, como las variadas versiones del 'enfoque de la sociedad civil', las principales posiciones que hoy tienen como objetivo el cambio social radical son una estrategia relativa al estilo de vida y una basada en el municipalismo confederal.

Hay varias versiones de la *estrategia relativa al estilo de vida*. Sin embargo, hay un elemento común que caracteriza a todas ellas. Todas suponen la no intervención en absoluto en el campo político y normalmente tampoco en el campo social general, como puede ser participar en las luchas colectivas de los trabajadores, los desempleados y otros grupos sociales, que no sean luchas sobre asuntos 'verdes' concretos, como las campañas por los derechos de los animales, etc.

Así que, en primer lugar está la manera de ver que suelen adoptar los partidarios de la ecología profunda, así como los libertarios que intentan crear un nuevo híbrido entre la ecología profunda y la social, como la 'ecología libertaria' de Peter Marshall¹ en Gran Bretaña o el 'ecocomunitarismo' de John Clark en Estados Unidos. Esta posición supone la no intervención directa en el campo político y social y en cambio un proceso que, partiendo de cada persona y penetrando poco a poco en grupos de afinidad, se plantea el objetivo de dar un ejemplo de estilo de vida sano y preferible en el plano individual y social: proyectos de desarrollo económico de la comunidad, 'zonas libres' e instituciones (escuelas libres, fábricas autogestionadas, asociaciones con fines de vivienda, sistemas de comercio y empleo local, municipios, granjas autogestionadas, etc.

Sin embargo, esta posición, que ha sido criticada por su naturaleza individualista² es, por sí misma, totalmente ineficaz en lo que respecta a producir algún cambio social radical. Aunque es útil en lo que atañe a crear otra cultura en pequeños sectores de la población y, al mismo tiempo, un incentivo moral para los activistas que quieren ver un cambio inmediato en sus vidas, esta estrategia no tiene ninguna posibilidad de éxito -en el contexto de la enorme concentración de poder que existe hoy- en lo que se refiere a crear la mayoría democrática necesaria para llevar adelante un cambio social radical. Los proyectos que propone pueden muy fácilmente quedar marginados o absorbidos en la estructura de poder existente (como ha sucedido muchas veces en el pasado) mientras que su efecto en el proceso de socialización es mínimo, si no nulo. Además, las estrategias relativas al estilo de vida, al concentrarse en asuntos sueltos (las campañas por los derechos de los animales, etc.), que no forman parte de un programa político general para la transformación social, dan a las élites dirigentes una oportunidad magnífica para usar su táctica tradicional del 'divide y reinarás'. Por ejemplo, el gobierno británico prefiere confiar en empresas de seguridad privadas (y sólo en

último caso en la policía), que reclutan gente de las clases bajas, para enfrentar las protestas de los Verdes. La consecuencia es que se oculta la naturaleza represiva del Estado y los activistas verdes quedan reducidos a tener enfrentamientos con los desempleados y los marginados disfrazados de 'guardias de seguridad'³.

Otra estrategia relativa al estilo de vida, que a primera vista parece una crítica de las demás, pero que, en realidad, se basa también en la actividad individual antes que en la política, es la que propone Ted Trainer⁴. Esta postura se basa en la suposición de que si se educa y se convence a bastantes personas para que cambien *individualmente* su estilo de vida el 'capitalismo se debilitará y se extinguirá':

Si cada vez más personas se pasan al lento camino en el que pueden vivir satisfactoriamente sin consumir mucho, entonces el capitalismo está condenado. A nada le teme más que a la disminución de las ventas. Ninguna empresa me venderá jamás ropa de moda o autos deportivos. Si hacemos ver a cada vez más personas lo conveniente y atractivo de pasarse a caminos parsimoniosos, el capitalismo se debilitará y se extinguirá.⁵

Sin embargo, el cambio social radical nunca puede efectuarse fuera del campo político y social principal. La eliminación de las estructuras y las relaciones de poder actuales no puede lograrse 'dando el ejemplo' ni educando y convenciendo. Para destruir el poder se necesita una base de poder. Pero la única manera en que una estrategia que quiera lograr una base de poder concuerda con los objetivos del proyecto democrático es, en mi opinión, mediante el desarrollo de un programa general para la transformación radical de las estructuras políticas y económicas locales.

La *estrategia del municipalismo confederal* constituye un sustituto radical de las estrategias relativas al estilo de vida y es perfectamente compatible con el proyecto democrático. El objetivo de esta estrategia es 'transformar y democratizar los gobiernos municipales, afincarlos en asambleas populares, unirlos en redes confederales, adueñarse de la economía regional por carriles confederales y municipales'⁶. En otras palabras, el objetivo es crear 'una esfera pública -y una política, en el sentido ateniense de la palabra- que crece en tensión y finalmente en un conflicto decisivo con el Estado'⁷.

Aunque algunas de las medidas que propone la estrategia relativa al estilo de vida no son incompatibles con la lógica del municipalismo confederal (por ejemplo, las cooperativas, las monedas locales, etc.), con todo, hay una diferencia fundamental entre ambas estrategias. Como señaló Murray Bookchin acertadamente:

Las propuestas concretas de descentralización, comunidades pequeñas, autonomía local, ayuda mutua y regionalización... no son intrínsecamente ecológicas o emancipadoras. Que sí lo sean depende en el fondo del contexto filosófico y social en el que situemos esos programas.⁸

En mi opinión, la diferencia esencial entre las dos estrategias en lo que atañe a su 'contexto' tiene que ver con el papel del individuo respecto al cambio social. En las estrategias relativas al estilo de vida, se piensa que el cambio social comienza en el estilo de vida de la persona y continúa por el esquivar del Estado y la economía de mercado, más que por la impugnación de éstos y el intento de sustituirlos por nuevas instituciones sociales. Por el otro lado, la estrategia del municipalismo confederal hace hincapié en el papel del individuo *social*, es decir del individuo que participa en las luchas políticas en el plano local y en las luchas sociales en general, con el fin de efectuar el cambio social, no 'dando un ejemplo', sino creando una confederación de municipios que estarán en tensión con el Estado-nación, hasta que éste sea sustituido

por aquélla⁹. Así, esta estrategia no sólo evita la marginación social a la que conduce inevitablemente la estrategia relativa al estilo de vida (como ha demostrado en los 25 últimos años el casi insignificante impacto social de los movimientos inspirados en ella) sino que además no cae en la trampa de estar 'tan inclinado hacia la idea de las reformas de los valores y el estilo de vida individuales, como camino político principal para el cambio social radical, que termina pareciendo verdaderamente contrario a la noción de lo colectivo'¹⁰ -trampa de la que el movimiento de la New Age es una muestra clara.

El industrialismo y la transición a una 'democracia' ecológica

Un intento reciente de definir la 'democracia ecológica' en términos de una sociedad organizada en comunidades y confederaciones ha dado la impresión de que puede estar relacionada con el proyecto de una democracia inclusiva y un municipalismo confederal. Esta impresión es completamente falsa. Como trataré de demostrar en este apartado, esta posición no tiene nada que ver con la democracia ni con el municipalismo confederal. En esencia, representa una mezcla de ecología profunda y estrategia relativa al estilo de vida por un lado y el enfoque de la sociedad civil que examinamos anteriormente, por el otro.

La estrecha afinidad de esta posición con la ecología profunda se hace evidente por el hecho de que prefiere definir el sistema socioeconómico actual como 'industrialismo' y no como economía de mercado o capitalismo. Para Roy Morrison, el industrialismo 'no es simplemente' capitalismo. En cambio, se define el industrialismo como 'un sistema para aumentar al máximo la producción y el consumo, pero es también algo más: el industrialismo es una civilización'¹¹. Más adelante, se nos hace saber que el industrialismo se caracteriza en todas partes 'por dos imperativos centrales: aumentar al máximo la producción y el consumo y aumentar al máximo las ganancias y/o el poder... jerarquía, progreso y técnica, unidos para formar el triángulo de acero del industrialismo'¹².

La definición citada deja claro de inmediato que el autor en realidad no está hablando sobre la estructura institucional de la economía de mercado y la economía de crecimiento consiguiente sino sobre una 'civilización'; en otras palabras, un fenómeno cultural más que un sistema socioeconómico y su ideología. No es extraño que Morrison vea el aumento al máximo de la producción y el consumo, así como el aumento al máximo de las ganancias, como dos imperativos centrales que caracterizan a la civilización industrial y no como imperativos que entrañan la dinámica de la economía de mercado y las relaciones capitalistas de propiedad respectivamente. Además, al confundir la economía de crecimiento con la ideología de crecimiento, pone en la misma bolsa del 'industrialismo' tanto las economías de mercado como los extintos regímenes del 'socialismo real', aunque en este último las estructuras de poder hayan tomado formas muy diferentes que las de las primeras. Su descripción de la jerarquía confirma la sospecha de que el autor no está hablando sobre un sistema socioeconómico sino sobre lo que él llama 'un principio organizador esencial de nuestra civilización'¹³. Así, se describe la jerarquía como 'el principio esencial ordenador de la industria. Las jerarquías industriales descansan no en las castas o las clases sino en el éxito en lo que se refiere a cumplir los imperativos industriales'¹⁴. Así, el autor pasa por alto el hecho de que las jerarquías industriales, que controlan los medios de producción, persiguen básicamente los mismos objetivos que las élites que son dueñas de los medios de producción y parece suscribirse al mito (casi extinto en la actualidad) del divorcio entre la propiedad y el control de la industria.

Sin embargo, esta problemática no es nada original. Parece que los ecologistas profundos están llegando actualmente a las conclusiones lógicas de su manera de ver, que, en su interpretación de la crisis ecológica, siempre ha hecho hincapié en la importancia de los sistemas de valores antes que de las instituciones y de la ciencia y la tecnología antes que del sistema de mercado. Por lo tanto, no sorprende que ahora no tomen en cuenta la propia economía de mercado. Así, como señala Janet Biehl en una crítica de un libro publicado recientemente sobre la revolución industrial: 'Kirkpatrick Sale define expresamente el industrialismo como 'el rasgo característico en el que se resumen los valores y las tecnologías de la civilización occidental'. Esta subjetivización del 'industrialismo' como un 'carácter' excluye un componente capitalista en el industrialismo de Sale'¹⁵.

Es claro que los ecologistas profundos y Morrison, basándose en un análisis 'histórico' simplista, que no puede distinguir conceptos elementales como las relaciones capitalistas de propiedad, la economía de mercado y la economía de crecimiento por un lado y la ideología de crecimiento por el otro, terminan mezclando todo bajo la rúbrica de 'industrialismo', al que se considera la causa de todos nuestros males. Por lo tanto, el hecho de que, como traté de demostrar anteriormente, la revolución industrial haya ocurrido en una sociedad en la que los medios de producción eran propiedad privada y estaban bajo control privado es simplemente pasado por alto en esta posición. También pasan por alto el hecho de que los extintos regímenes del 'socialismo real', en realidad, tuvieron la opción de no adoptar la economía de crecimiento pero simplemente no la quisieron. No porque se propusieran convertirse en sociedades industriales y por lo tanto tuvieran que adoptar el sistema general de relaciones sociales determinado por la realidad industrial, como parece afirmar Morrison; ni siquiera debido a los factores 'objetivos' que obviamente necesitaban cierta cuota de desarrollo económico para satisfacer las necesidades de sus pueblos. Aunque dichos factores efectivamente desempeñaron un papel, la razón principal por la que actuaron de ese modo fue un factor 'subjetivo', es decir, el hecho de que la identificación del progreso con el crecimiento económico era una parte esencial de la ideología de dichos regímenes (véase el Capítulo 2).

También, la afinidad de esta posición con la de los partidarios de la sociedad civil y el hecho de que Morrison, igual que éstos, carecía de una comprensión real de la democracia como una forma de sociedad diferente, se hace evidente en el significado que atribuye a la democracia política y económica, así como a la transición a la misma. Así, según Morrison, la civilización ecológica 'se basa en la capacidad de la sociedad civil para crear una amplia gama de formas sociales voluntarias que permitan hacer opciones democráticas para limitar y transformar con creatividad el industrialismo'¹⁶. Como los partidarios de la sociedad civil, Morrison da por sentada la estructura institucional que determinan la economía de mercado y la democracia 'estatista'. Es por esto por lo que, como subraya al describir la transición a una democracia ecológica, 'la sociedad civil y sus creaciones no van a luchar por el poder, sino trabajar por la comunidad y la libertad... el objetivo de éstas no es tomar o abolir el poder del Estado ni sustituir los mecanismos del mercado por la planificación, sino transformar a la vez el Estado y el mercado'¹⁷. Por lo tanto, es obvio que esta manera de ver, que ignora por completo la dinámica de la economía de mercado y el estatismo, supone que una nueva democracia ecológica podría de algún modo surgir de la estructura institucional actual, no impugnándola sino evitándola.

En este contexto, no sorprende que la democracia económica no sea definida en términos de una sociedad sin mercado, sin dinero y sin Estado. Como dice Morrison: 'Una economía ecológica o 'verde' implica un intercambio comercial voluntario, ba-

sado en la comunidad, unido a una mediación y planificación política, democrática y descentralizada que proviene de las bases'. Y para disipar cualquier duda acerca del significado de esta democracia económica describe las experiencias de Mondragón en España, Seikatsu en Japón y la Cooperativa Atlantic en Canadá, como ejemplos de 'la democracia ecológica en acción'¹⁸.

Del mismo modo, el hecho de que el autor no entiende verdaderamente lo que significa la democracia queda muy claro cuando parece incapaz de percibir la diferencia cualitativa entre el significado clásico de la democracia y lo que hoy pasa por 'democracia': 'La historia de la democracia va desde el muy imperfecto sistema ateniense de hace 2.500 años hasta la todavía bastante imperfecta democracia estadounidense... y hasta las decenas de frágiles nuevos sistemas de distintas partes del mundo que pueden representar un nuevo comienzo de la democracia. Estos nuevos comienzos vienen con la afirmación de la sociedad civil como un lugar creativo para el cambio, como Solidaridad en Polonia'¹⁹.

Coherentemente con la noción de 'democracia' que tiene esta postura, la transición a una democracia ecológica no se realizará mediante un programa que impugne la actual estructura institucional, sino mediante 'un programa de delegación del poder que ha de presentarse desde abajo, desde el campo de la sociedad civil'²⁰. Esto significaría una estrategia para dar poder a la comunidad en la que intervinieran asociaciones, organizaciones e instituciones, así como empresas de la comunidad, a la que, sin ninguna base de poder, sucedería, como por arte de magia, la extinción del Estado y la economía de mercado. En este contexto, es interesante ver cómo esta posición desvirtúa hasta el concepto de confederación. Así, una confederación ya no significa la integración de democracias basadas en la comunidad en una nueva forma de organización social para reemplazar el Estado y la economía de mercado. En cambio, nos enteramos que:

una democracia ecológica se organiza basándose en la confederación, el tercer gran tema de la transformación de la sociedad. La confederación no es simplemente una cuestión de relaciones formales entre gobiernos. Abarca un grado limitado de soberanía y asociación.... Confederación es la gran mezcla de conexiones sociales que forman la matriz dinámica de una sociedad ecológica, que comprende grupos en todos los planos y de todos los tipos. Por ejemplo, las confederaciones con niños incluirán relaciones entre escuelas, grupos de padres, hospitales, guarderías y grupos económicos cooperativos. Confederación quiere decir alianzas múltiples.²¹

Por lo tanto, es evidente que ni la estrategia de transición que proponen los partidarios de esta posición ni el significado que le atribuyen a la democracia misma son pertinentes para el proyecto de democracia inclusiva.

Una estrategia para la transición a una democracia inclusiva confederal

En mi opinión, la única solución realista para crear una nueva sociedad fuera de la economía de mercado y del Estado-nación, así como de las nuevas formas estatistas internacionales de organización que están surgiendo actualmente, es una estrategia política que comprenda la participación gradual de un número creciente de personas en un nuevo tipo de política y un cambio paralelo que sitúe los recursos económicos (mano de obra, capital, tierra) fuera de la economía de mercado. El objetivo de esta estrategia de transición debería ser crear cambios en la estructura institucional y los sistemas de valores que, después de un período de tensión entre las nuevas instituciones y el Estado, en alguna etapa reemplazaría la economía de mercado y la democracia

estatista, así como el paradigma social que 'los justifica', por una democracia inclusiva y un nuevo paradigma democrático respectivamente.

Es claro que la etapa de transición tiene aspectos que no conservaría la sociedad final. Por ejemplo, muchos de los aspectos que configuran una democracia económica de transición obviamente no estarán presentes en la sociedad futura. La democracia inclusiva, como la describí en los dos capítulos anteriores, es una sociedad sin Estado, sin dinero y sin mercado. Por otro lado, la estrategia de transición, que da por supuestas la 'democracia' estatista y la economía de mercado, tiene como objetivo crear otras instituciones y otros valores que conduzcan a la gradual desaparición de las instituciones y los valores jerárquicos actuales. En este contexto, las críticas que un conocido ecosocialista ha hecho a una versión anterior²² de las propuestas que se exponen en este capítulo están obviamente fuera de lugar. Así, David Pepper, mezclando los aspectos económicos de una estrategia de transición a una democracia económica con la propuesta de una democracia económica en sí, concluye que 'Fotopoulos propone claramente una economía monetaria: en efecto, todos estos aspectos también integran la 'corriente principal' de la economía capitalista verde'²³.

Así que, la cuestión que se plantea aquí es saber qué tipo de estrategia puede asegurar la transición a una democracia inclusiva, en particular, qué tipo de medidas y de organización política pueden formar parte de un proyecto democrático. Dentro de esta problemática, tenemos que tratar asuntos relativos a la importancia de las luchas y las actividades que atañen a cada aspecto de la democracia inclusiva: el económico, el político, el social y el ecológico. Un principio rector general en lo que respecta a elegir una estrategia de transición apropiada es la concordancia de medios y fines. Debería estar claro que una estrategia que tenga como objetivo construir una democracia inclusiva no puede llevarse adelante empleando métodos políticos oligárquicos ni actividades individualistas.

Así que, en primer lugar en lo que respecta a la importancia de la actuación colectiva en forma de conflictos de clase entre las víctimas de la economía de mercado internacionalizada y las élites dirigentes, pienso que se debería apoyar sin vacilaciones todas esas luchas que pueden ayudar a poner en evidencia la naturaleza represiva de la democracia estatista y la economía de mercado. Sin embargo, habría que recalcar la naturaleza sistémica de las causas de esos conflictos y, obviamente, esta tarea no puede quedar en manos de las direcciones burocráticas de los sindicatos y otras organizaciones tradicionales. Esta es la tarea de las asambleas de los lugares de trabajo que podrían confederarse y participar en esas luchas, como parte de un movimiento democrático más amplio que se base en las comunidades y sus estructuras confederales.

Luego viene la cuestión de la importancia de la actuación de las bases en forma de educación o, como otra posibilidad, la acción directa y actividades como los proyectos de desarrollo económico comunitario, las fábricas autogestionadas, las asociaciones con fines de vivienda, los planes en el marco de los sistemas locales de empleo y comercio, los municipios, las granjas autogestionadas, etc. Es obvio que dichas actividades no pueden, por sí mismas, conducir al cambio social radical. Por otro lado, las mismas actividades son partes necesarias y deseables de una estrategia política general, en la que la presentación de candidatos para las elecciones locales representa la culminación de la actuación de las bases. Esto se debe a que la presentación de candidatos para las elecciones locales es sin duda el medio más eficaz para difundir masivamente un programa a favor de una democracia inclusiva y *da asimismo la oportunidad de iniciar su ejecución inmediata a una escala social considerable*.

En otras palabras, presentarse a las elecciones locales no es sólo un ejercicio educativo sino también una expresión de la convicción de que es sólo en el plano local, el

plano de la comunidad, donde puede basarse hoy en día la democracia directa y económica. Por lo tanto, la participación en las elecciones locales es también una estrategia para ganar poder, a fin de desmantelarlo inmediatamente sustituyendo el papel de las autoridades locales en la toma de decisiones por el de las asambleas al día siguiente de ganar la elección. Presentar candidatos a las elecciones locales da la posibilidad de empezar a cambiar la sociedad *desde abajo*, que es la única estrategia democrática, en contraste con los métodos estatistas que intentan cambiar la sociedad *desde arriba*. Es porque la comunidad es el elemento económico y social fundamental de una futura sociedad democrática por lo que tenemos que empezar a cambiar la sociedad desde allí, mientras que los estatistas, en conformidad con su manera estatista de ver la democracia, creen que tienen que empezar desde arriba, el Estado, para 'democratizarlo'.

Por eso, los estatistas son perfectamente coherentes con sus objetivos cuando participan en elecciones nacionales, elecciones federales o elecciones europeas, mientras que los partidarios de una democracia inclusiva serían totalmente incoherentes con los que, según afirman, son los suyos si lo hacen. En síntesis, la diferencia fundamental entre las elecciones locales por un lado y las elecciones parlamentarias por el otro (nacionales o europeas) es que mientras que participar en las primeras es compatible con el objetivo de una democracia inclusiva y además es capaz de llevar, de por sí, al desmantelamiento de las estructuras de poder, participar en elecciones parlamentarias no es ninguna de las dos cosas. Desde este punto de vista, la distinción que hace Howard Hawkins²⁴ entre presentarse a las elecciones nacionales (sólo educar) y presentarse a las elecciones locales (educar y ganar a fin de llevar adelante el programa municipalista confederal) introduce una doble incoherencia: primero, una incoherencia entre la finalidad de una democracia ecológica y el medio de lograrla que podría resultar, por lo menos, confuso acerca de la verdadera naturaleza del movimiento; segundo, una incoherencia entre la verdadera naturaleza del acto de presentarse como candidato para un cargo del Estado, lo que constituye un proceso que incorpora la lógica de un sistema social diferente ('Me presento como candidato para utilizar mi cargo y resolver los problemas de ustedes') y la naturaleza educativa que Hawkins le atribuye al mismo ('Me presento como candidato no para asumir un cargo'), incongruencia que fácilmente podría marginar a los candidatos por falta de pertinencia en el proceso de la elección.

Por lo tanto, el objetivo inmediato debería ser la creación, desde abajo, de 'bases populares de poder político y económico', es decir, el establecimiento de esferas públicas locales de democracia directa y económica que, en alguna etapa, se confederen a fin de crear las condiciones para el establecimiento de una nueva sociedad. En mi opinión, ésta es hoy la estrategia más realista para resolver de inmediato los problemas sociales, económicos y ecológicos fundamentales que enfrentamos y al mismo tiempo para desmantelar las estructuras de poder existentes. Un programa político basado en el compromiso de crear las instituciones de una democracia inclusiva terminará por captar la imaginación de la mayoría de la población, que ahora sufre los efectos de la concentración de poder político y económico:

- por estar excluidos de la esfera 'pública' actual, que monopolizan los políticos profesionales;
- por estar privados de la posibilidad de controlar la manera en que se satisfacen sus necesidades, que hoy está librada a las fuerzas del mercado;
- por el empeoramiento diario de la calidad de vida debido al inevitable deterioro del medio ambiente, que impone la dinámica del mercado.

Una vez que empiecen a instalarse las instituciones de la democracia inclusiva y la gente, por primera vez en su vida, empiece a tener poder real para determinar su propio destino, comenzará el desgaste gradual del paradigma social dominante y de la estructura institucional actual. Se creará una nueva base de poder popular. Una a una las ciudades pequeñas y las más grandes, así como las regiones, quedarán fuera del control efectivo de la economía de mercado y el Estado-nación y las estructuras políticas y económicas correspondientes a éstos se reemplazarán por las confederaciones de comunidades gobernadas democráticamente. Se creará un doble poder en tensión con el Estado. Por supuesto, en alguna etapa, las élites dirigentes y sus partidarios (quienes seguramente objetarán la idea de la pérdida gradual de sus privilegios) tras haber agotado medios de control más sutiles (medios de comunicación, violencia económica, etc.), pueden sentirse tentados de utilizar la violencia física para proteger sus privilegios, como hicieron siempre en el pasado. Pero, para entonces, otro paradigma social se habrá vuelto hegemónico y se habrá producido la ruptura del proceso de socialización -la condición previa para que se efectúe un cambio en la sociedad *instituida*-. Se habrá perdido la legitimidad de la 'democracia' actual. En esa etapa, la mayoría del pueblo estará preparada para enfrentar la violencia del Estado a fin de defender las nuevas estructuras políticas y económicas. Una vez que los ciudadanos le hayan tomado el gusto a la verdadera democracia, no habrá violencia física o económica que baste para 'persuadirlos' a que vuelvan a las formas de organización seudodemocráticas.

Un nuevo tipo de organización política

La puesta en práctica de una estrategia como la que acabamos de describir requiere un nuevo tipo de organización política que refleje la estructura de sociedad deseada. Ésta no sería el partido político corriente, sino una forma de 'democracia en acción', que emprendería varias formas colectivas de intervención en:

- el plano político (creación de instituciones políticas 'sombra' basadas en la democracia directa, las asambleas de vecinos, etc.);
- el plano económico (establecimiento de centros comunitarios de producción y distribución que se poseen y controlan colectivamente);
- el plano social (democracia en el lugar de trabajo, la familia, etc.);
- el plano cultural (creación de actividades artísticas y de comunicación controladas por la comunidad).

Sin embargo, todas estas formas de intervención deberían formar parte de un programa general de transformación social destinado a posibilitar que cada municipio ganado en las elecciones locales pase a ser una democracia inclusiva (véase el apartado siguiente). La nueva organización política podría, por ejemplo, adoptar la forma de una confederación de grupos autónomos (en los planos regional, nacional, continental y mundial) que aspire a lograr una transformación democrática de sus respectivas comunidades. Los miembros de esta organización no están comprometidos con ningún sistema filosófico cerrado sino sólo con el proyecto de democracia inclusiva basada en una confederación de comunidades. Los activistas de este movimiento actúan no como 'cuadros del partido' sino como un catalizador para el establecimiento de las nuevas instituciones. Su compromiso es con las instituciones democráticas mismas y no con la organización política o, como lo expresa Murray Bookchin, con 'las formas *sociales*, no con las formas *políticas*'²⁵.

El establecimiento de la democracia está destinado a ser un proceso largo en el que intervenga un amplio movimiento popular. Como señala Castoriadis, el establecimiento de la democracia sólo puede provenir

de un inmenso movimiento de la población del mundo y sólo puede concebirse extendido por todo un período histórico. Pues un movimiento de ese tipo -que va mucho más allá de todo lo que habitualmente se piensa como 'movimiento político'- no ocurrirá si no pone también en tela de juicio todas las significaciones institucionales, las normas y los valores que dominan el actual sistema... como una profunda transformación psíquica y antropológica, con la creación paralela de nuevas formas de vida y nuevas significaciones en todos los ámbitos.²⁶

Por lo tanto, es necesario que la nueva organización política se apoye en la base política más amplia posible. En mi opinión, esto quiere decir un amplio espectro de movimientos radicales, que comprenda a los ecologistas radicales, los partidarios del proyecto de autonomía, los socialistas libertarios, las feministas radicales, los izquierdistas libertarios y cualquier otra corriente que se adhiera al proyecto democrático.

Dado el carácter amplio del proyecto de democracia inclusiva, el nuevo movimiento debería atraer a casi todos los sectores de la sociedad, excepto las clases altas y las élites dirigentes. Así, el componente de democracia económica del proyecto debería interesar en primer lugar a las principales víctimas de la economía de mercado internacionalizada, la 'mayoría perjudicada del 60 por ciento' que, como vimos anteriormente, comprende las clases bajas y los marginados, es decir, los desempleados, los obreros, los empleados con sueldos bajos, los trabajadores a media jornada, los trabajadores ocasionales, los agricultores que están desapareciendo debido a la expansión de las agroindustrias, así como los futuros miembros de las clases medias profesionales, los estudiantes, que también ven desvanecerse con rapidez sus sueños de seguridad laboral en los mercados 'flexibles' de trabajo que se están creando. También debería atraer a una parte considerable de la sociedad del '40 por ciento', que, incapaz de unirse a la 'clase alta', vive en condiciones de inseguridad constante.

Pero, aparte de los problemas de clase que una democracia económica promete resolver, están también los problemas no estrictamente clasistas relativos al género, la edad, la opresión étnica y jerárquica²⁷, así como el primordial problema ecológico. Una democracia inclusiva, y en particular sus componentes de democracia directa, democracia en la esfera social y democracia ecológica, debería atraer no solo a las víctimas del sistema de economía de mercado sino también a todos los que están alienados por el arte de gobernar actual que pasa por 'política': los trabajadores que están alienados por las estructuras jerárquicas del lugar de trabajo; las mujeres que están alienadas por las estructuras jerárquicas tanto de la familia como del lugar de trabajo; las minorías étnicas o raciales que están alienadas por una democracia 'estatista' que los discrimina, y así sucesivamente. Por último, el componente ecológico del proyecto debería atraer a todos los sectores de la sociedad que están preocupados por la destrucción del mundo natural en general y el acelerado deterioro de la calidad de vida en particular.

La creación de un nuevo movimiento democrático radical amplio representaría la síntesis, así como la superación, de los movimientos sociales a favor del cambio más importantes del presente siglo. Pienso que la única vía realista de salida de la actual crisis multidimensional es la creación de un movimiento radical de ese tipo que, sin ningún prejuicio ideológico, aparte de su compromiso con una democracia inclusiva, luche por detener la constante -y últimamente acelerada- destrucción de la vida humana y los recursos naturales y por establecer el reino de la libertad ahora mismo.

Un programa general de transformación social

Una parte expresa de un programa general de cambio social debería ser la elaboración del objetivo global de crear una forma diferente de organización social, basada en una democracia inclusiva. En otras palabras, en el programa debería quedar absolutamente claro que el objetivo final de los diferentes proyectos comprendidos en él es la sustitución de la actual estructura oligárquica por una democracia inclusiva. Esto implica que se debería luchar por ese programa no sólo como un tipo de política nueva sino como la estructura política misma que lleva a una democracia inclusiva. Es por esto por lo que, como se ha destacado anteriormente, el de la comunidad es el único plano político en el cual deberían desarrollar su actividad los partidarios de este programa. Una vez que se haya creado una estructura política nueva en cierto número de comunidades, el creciente cambio en el equilibrio de poder en contra del estatismo y la economía de mercado generará las condiciones previas para efectuar un cambio también en la estructura económica.

De modo que, el programa económico para la transición a una democracia inclusiva, que empieza en las exigencias que movilizan a la gente en torno a sus preocupaciones inmediatas, debería tener los siguientes objetivos fundamentales:

- a) crear una conciencia diferente a la que existe hoy, con respecto a los métodos de resolver los problemas económicos y ecológicos de una manera democrática. Por lo tanto, debería relacionar la crisis económica y ecológica actual con el sistema socioeconómico imperante y la necesidad de sustituirlo por una democracia inclusiva basada en comunidades independientes confederadas;
- b) hacer propuestas acerca de cómo comenzar la creación de las instituciones económicas mismas que conducirían a una democracia inclusiva. Por lo tanto, debería proponer medidas que pudieran conducir a la vez a una mayor independencia económica y a procedimientos democráticos para tomar decisiones que afecten a la vida económica de los habitantes de la comunidad.

Con respecto al objetivo (a), es decir, el de crear una conciencia diferente, el programa debería mostrar con claridad que problemas como el desempleo, la pobreza y la alienación del trabajo, así como la mala calidad de vida, la contaminación y la destrucción del medio ambiente están todos relacionados con un sistema económico basado en la concentración del poder político y económico en manos de élites que representan una parte muy pequeña de la población. Se debería recalcar en especial la relación de cada una de las principales instituciones de la sociedad con dichos problemas. De modo que el programa debería mostrar que:

- la asignación de recursos por medio del mercado conduce al desarrollo perverso, el desempleo y la pobreza;
- la propiedad privada de los recursos productivos impide el florecimiento de la democracia económica y, en cambio, conduce a la oligarquía política y económica, la alienación de la gran mayoría de las personas con respecto a sus trabajos, así como a la perpetuación de la desigualdad;
- la organización jerárquica de la sociedad, tanto en el plano 'macro' (el Estado) como en el 'micro' (relaciones jerárquicas en el trabajo, la familia, la escuela, etc.), es incompatible con la democracia en la esfera social, la autonomía y la libertad.

Con respecto al objetivo (b), es decir el de crear otras instituciones económicas que conduzcan a la democracia económica, el programa debería aclarar la razón por la que si el movimiento democrático radical toma el poder en varios municipios podrían crearse las condiciones para:

- el importante aumento de la independencia económica de la comunidad;
- el establecimiento de un sector económico *démico*, es decir, un sector cuyo propietario es el *demos*;
- la creación de un mecanismo democrático para tomar decisiones económicas que afecten al sector *démico* de la comunidad, así como decisiones que afecten a la vida de la comunidad en su conjunto (producción local, gasto local, impuestos locales, etc.).

Así, un programa general de cambio social debería dejar claro que los ciudadanos, por primera vez en sus vidas, tendrán un poder real en lo que respecta a determinar los asuntos económicos de su propia comunidad, aunque de manera parcial al comienzo. Todo esto, en contraste con el estado de cosas actual, en que los ciudadanos supuestamente tienen el poder, cada cuatro años más o menos, para cambiar el partido que está en el gobierno y sus políticas fiscales pero, en realidad, no se les da ninguna opción verdadera ni manera alguna de imponer su voluntad a los políticos profesionales. Esto resulta obvio, por ejemplo, si se examinan los programas económicos de los partidos nacionales, expresados con términos tan amplios y vagos que no comprometen a los políticos a nada concreto. Además, con respecto al gasto del dinero recaudado por los impuestos, o proveniente de préstamos, es claro que el pueblo no tiene ningún poder para decidir acerca de su asignación.

La transición a la democracia económica

Pero examinemos las medidas que pueden tomarse en el período de transición, para que podamos avanzar hacia el cumplimiento de las condiciones previas para la instauración de la democracia económica. En los capítulos anteriores se mencionaron dichas condiciones: la independencia de la comunidad, la propiedad *démica* de los recursos productivos y la asignación confederal de recursos.

La independencia en el período de transición

La cuestión que se plantea aquí es la de saber cómo podemos crear hoy las condiciones para la independencia; es decir, cómo podemos ayudar a la transición desde 'aquí' hasta 'allá', desde las comunidades dependientes hasta las independientes. Hay literatura importante sobre la independencia económica local²⁸ que puede proporcionar valiosas indicaciones para las medidas que han de tomarse en una fase de transición hacia una democracia inclusiva. Además, últimamente, cada vez más comunidades locales que sufren las consecuencias de la descentralización dependiente, están empezando a fomentar la independencia mediante iniciativas locales, para satisfacer las necesidades locales con recursos locales²⁹. Sin embargo, toda esta literatura, así como los esfuerzos locales correspondientes, aspiran a aumentar la independencia, dando por supuesta la economía de mercado y la democracia liberal. Por otro lado, un movimiento en favor de la democracia inclusiva tiene que elaborar una estrategia de transición para efectuar una descentralización radical del poder a los municipios con el objetivo expreso de reemplazar la estructura institucional actual del orden político y del económico. Las propuestas siguientes pueden tomarse como una contribución a este esfuerzo.

Las condiciones previas esenciales para el aumento de la independencia económica local se relacionan con la creación del poder económico local, en la forma de:

- poder financiero;

- poder de fijar impuestos; y, sobre todo,
- poder para determinar la producción.

Con respecto al poder financiero, el establecimiento de una red bancaria de la comunidad es una cosa necesaria en este proceso. Sin embargo, establecer una red de este tipo presupone que el movimiento en favor de una democracia inclusiva ha presentado candidatos en las elecciones locales y ya ha tomado el poder en algunos municipios. No obstante, incluso antes de que esto ocurra, hay una serie de medidas que pueden tomarse en esta dirección, hasta en el plano de municipios por separado. Estas medidas son:

- la creación de uniones de crédito *démicas* (es decir cooperativas financieras apoyadas por el *demos*) para dar préstamos a los miembros que los necesiten para uso personal o para invertir. Se podría imaginar también el alcance del papel de estas uniones, a fin de que los ahorros de los miembros se utilicen para el desarrollo local y la inversión social, en otras palabras, para invertir en la población local a fin de permitirle generar fuentes de empleo viables. De esta manera, las uniones de crédito *démicas* podrían convertirse en la base sobre la que se podría formar la red bancaria de la comunidad en una etapa posterior.
- una moneda *démica* (es decir, una moneda controlada por el *demos*) podría desempeñar un papel fundamental en lo que atañe a aumentar la independencia económica de la comunidad. Esto se debe a que la moneda local hace posible que la comunidad controle la actividad económica y, al mismo tiempo, puede utilizarse como un medio de aumentar el ingreso de los miembros de la comunidad. La moneda *démica* no sustituye a la moneda nacional sino que la complementa. Como primer paso, se podrían municipalizar los actuales planes de los sistemas locales de empleo y comercio³⁰. Más adelante, se puede crear un sistema *démico de tarjetas de crédito* con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Así, se puede entregar a los ciudadanos en forma gratuita 'tarjetas de crédito' *démicas* en las que el límite del crédito se determinaría por el ingreso y la riqueza (es decir, cuanto más elevado el nivel de ingreso y riqueza del ciudadano más bajo el límite del crédito). Estas tarjetas de crédito podrían utilizarse para comprar bienes y servicios producidos en el lugar. Por lo tanto, un sistema de este tipo podría ser útil en la transición a un sistema de vales que reemplazaría a todas las monedas en una democracia inclusiva.

Con respecto al poder de gravar con impuestos, el programa de transición a una democracia inclusiva debería incluir medidas para pasar dicho poder del plano nacional al local, como paso fundamental en lo que respecta a crear las condiciones de la independencia económica. Luego, podría introducirse un nuevo sistema tributario *démico* (es decir, un sistema tributario controlado por el *demos*) con el que se intentaría satisfacer, tanto como sea posible dentro de las limitaciones de la economía de mercado que seguirían existiendo en el período de transición, los principios básicos de una democracia inclusiva. De manera que habría que introducir una modificación en la carga impositiva que consistiera en desgravar los ingresos y gravar la riqueza, la ocupación de tierras, el uso de energía y recursos, así como las actividades que generan costos sociales y ambientales para la comunidad. Los principales objetivos de un sistema tributario *démico* deberían ser:

- el financiamiento de un programa de municipalización de los recursos productivos locales, que diera oportunidades de empleo a todos los ciudadanos de la comunidad;

- el financiamiento de un programa de gasto social que cubriera las necesidades básicas de todos los ciudadanos, en la forma de un ingreso básico (cuyo monto dependa del ingreso y la riqueza del ciudadano) garantizado para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de trabajar;
- el financiamiento de disposiciones institucionales que pongan en vigencia la democracia en la familia;
- el financiamiento de programas para sustituir las fuentes tradicionales de energía con recursos locales, especialmente la energía natural (solar, eólica, etc.) que reduzcan al mínimo la dependencia de las economías locales respecto a los centros externos, así como las consecuencias en el medio ambiente vinculadas con la energía;
- la penalización económica paralela de las actividades antiecológicas realizadas por las filiales de las grandes transnacionales instaladas en la comunidad.

Así, el efecto combinado de las medidas mencionadas será el de redistribuir el poder económico dentro de la comunidad, en el sentido de una mayor igualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Esto, unido a la introducción de los procedimientos de planificación democrática (ver página 263) debería preparar en gran medida el terreno para la transición a una democracia económica plena.

En cuanto al importantísimo poder para determinar la producción, se deberían idear programas generales que contengan propuestas concretas sobre los cambios que es preciso introducir en la estructura económica de cada municipio para poder alcanzar los objetivos de una democracia inclusiva. Una estrategia de transición a una mayor independencia implicaría que la población de la comunidad produjera más para todos y cada uno y se sustituyeran los bienes producidos fuera de la comunidad por bienes y servicios producidos localmente. Se pueden dar incentivos económicos a los comerciantes locales para estimularlos a que tengan existencias de artículos producidos localmente y a los ciudadanos para que los compren. Esto, a su vez, estimularía a los productores locales (agricultores, artesanos, etc.) para que produzcan para el mercado local, lo que rompería las cadenas de los grandes fabricantes y distribuidores.

No obstante, la creación de *empresas démicas* (es decir, empresas cuyo propietario es el *demos*) en la órbita de la producción y la distribución sólo tendrían significación política, en esta etapa de transición hacia una democracia inclusiva, si y solo si forman parte de un programa político general de transformación social radical. Como dijo Murray Bookchin en relación con su programa de municipalismo confederal:

*Sacadas de un contexto municipalista libertario y un movimiento político centrado en alcanzar objetivos municipalistas revolucionarios como un doble poder contra las transnacionales y el Estado, las cooperativas de comestibles son poco más que empresas benévolas que el capitalismo y el Estado pueden tolerar fácilmente sin temor alguno de que los ataquen.*³¹

Es de hacer notar que la reactivación de la economía local, en el contexto de entidades nacionales y supranacionales más grandes, podría desempeñar un papel decisivo no sólo en lo referente a fundar la democracia económica sino también a reestructurar las regiones más débiles económicamente. Sólo la reducción del grado de dependencia que estas regiones tienen de los centros metropolitanos permitiría crear un nuevo modelo de producción y consumo, compatible con el potencial económico de cada región. Por ejemplo, para un país como Grecia, la reactivación de las economías locales constituye hoy la única manera de salir de la crisis económica crónica que generó el fracaso histórico del estatismo y la iniciativa privada en crear una estructura

productiva moderna que estuviera en condiciones de satisfacer las necesidades básicas del país sin condenar al desempleo y la emigración a gran parte de la población, especialmente a los jóvenes³².

Por último, una estrategia de transición a una mayor independencia debería incluir la creación de un *sistema démico de bienestar social*, es decir un sistema de bienestar social controlado por el *demos*. Pasar a los municipios los servicios sociales importantes (educación, salud, vivienda, etc.) es de particular interés hoy, cuando el Estado benefactor está en ruinas y va siendo reemplazado por redes de seguridad para los más pobres y el paralelo aumento del suministro privado en lo que respecta a las necesidades básicas. Debería elevarse al máximo la utilización de los recursos productivos locales en estos servicios tanto para dar empleo a la población local como para generar ingresos locales y, además, para disminuir considerablemente la dependencia del exterior. Sin embargo, un sistema general de bienestar social démico que implique la prestación de servicios sociales a niveles más elevados (educación terciaria, grandes hospitales, etc.) sólo podría establecerse con la cooperación de varios municipios y podría constituir la base de un sistema de bienestar social confederal. Un sistema de bienestar social démico no sólo será menos propenso a la burocratización sino que además proporcionará un mecanismo mucho más eficaz que el sistema del Estado benefactor, gracias a su tamaño, que será más pequeño, y a su administración, que será más fácil por estar en manos de ciudadanos con total conocimiento de los problemas locales. Además, como la municipalización de los servicios sociales formará parte de un programa para aumentar la autonomía individual y social, el efecto no será el de crear una nueva cultura de la dependencia.

La transición a una economía 'démica'

La creación de un sector económico démico es un paso fundamental en la transición a una democracia inclusiva, no sólo debido a su importancia con respecto a la democracia económica sino también porque el establecimiento de unidades productivas autogestionadas constituye la base de la democracia en los lugares de trabajo. Un sector démico supondría la existencia de nuevas formas colectivas de propiedad que asegurarían el control de la producción no sólo por parte de quienes trabajan en los centros de producción sino también por parte del *demos*. Los centros de producción podrían pertenecer al *demos* y ser administrados por los trabajadores de esos centros, mientras que su dirección técnica (comercialización, planificación, etc.) podría encomendarse a personal especializado. No obstante, el control general de las empresas démicas debería estar en manos de las asambleas de la comunidad que supervisarían su producción y las políticas relativas al empleo y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, las asambleas de la comunidad podrían decidir reducir de manera drástica las diferencias de salarios del personal empleado en las empresas démicas, como un paso en la transición a una democracia económica.

Por lo tanto, las nuevas formas de organización de la producción y la propiedad colectiva no sólo crearían las condiciones previas para la instauración de la democracia económica sino que además aumentarían el 'interés social general'. Esto contrasta con el interés parcial que inevitablemente persiguen las clases y grupos sociales de los sistemas sociales organizados jerárquicamente. Así que la explicación del fracaso económico de las empresas socialistas no es la privatización neoliberal (con la connivencia de los socialdemócratas) de éstas sino su municipalización. El establecimiento de una serie de empresas démicas que pertenecen al *demos* y son controladas por éste (mediante las asambleas de la comunidad) en colaboración con las personas que traba-

jan en ellas (mediante las asambleas del lugar de trabajo) crearía oportunidades de empleo local e incrementaría el ingreso local en condiciones que garantizan:

- la democracia económica en el sentido de participación democrática en la dirección de esas empresas;
- la democracia en los lugares de trabajo sin estructuras jerárquicas institucionalizadas de ninguna especie;
- la seguridad del empleo;
- el equilibrio ecológico.

Las dos preguntas importantes que se plantean con respecto a la municipalización de la economía en el período de transición son: ¿cómo establecer esas empresas démicas? y ¿cómo dirigir las hasta que se conviertan en partes de una democracia económica completa?

Con respecto a la primera pregunta, el establecimiento de empresas démicas podría efectuarse mediante una combinación de métodos. Algunos pueden emplearse incluso antes que los partidarios de un programa de democracia inclusiva lleguen al poder en un municipio. Por ejemplo, los *fideicomisos de tierras de la comunidad* sirven para recaudar dinero para la compra de tierra que será de propiedad colectiva utilizando el valor de la tierra misma como fianza. Este tipo de fideicomisos ya se han empleado en diferentes lugares en relación con el desarrollo de la comunidad³³.

Hay otras medidas que sólo pueden adoptarse después de ganar las elecciones locales. Por ejemplo, una medida importante para establecer un sector económico démico es la creación de una red de cooperativas bancarias démicas, similar, por ejemplo, a la red vasca de la Caja Laboral Popular que tiene tanto éxito en España³⁴, que apoya a las cooperativas de Mondragón. En España, esta red no es propiedad de los municipios y la instauró la gente que participó en la creación del movimiento cooperativo, un procedimiento que suscita serias objeciones con respecto a la conveniencia de un proyecto de ese tipo pero también con respecto a su viabilidad fuera de la fuertemente nacionalista comunidad vasca de Mondragón. Una manera más viable y conveniente puede ser establecer una red bancaria municipal (en lo que respecta a la propiedad y el control) en los municipios que estén en poder de los partidarios de la democracia inclusiva. Así, cada municipio podría tener su propio banco démico que podría integrarse en una red regional que después sea confederal. Una red de este tipo podría utilizarse para:

- absorber los ahorros locales que la red captaría por el hecho de que los ahorristas podrían controlar el carácter de sus inversiones. Este control podría ejercerse mediante las asambleas de la comunidad, en colaboración con las asambleas de los empleados del banco, para garantizar que los ahorros se destinen a proyectos que tengan como objetivo el desarrollo local, el aumento al máximo del empleo local, la limitación de los efectos de la producción en el medio ambiente, etc.;
- financiar inversiones en modernos centros de producción que tengan como objetivo la creación local de riqueza social y la consiguiente disminución de la dependencia de la economía local de los centros externos. Así, lo que se recaude por el sistema tributario local se emplearía no sólo para financiar proyectos de infraestructura y servicios sociales locales sino también para financiar -a través de la red de bancos démicos- inversiones en nuevos centros de producción (o la compra de centros viejos) que han de incluirse en el sector démico de la economía. Por lo tanto, la mayor parte del capital inicial para establecer las empresas démicas tendría que provenir de los ahorros de la comunidad que, a través de la red bancaria démica, se prestarían a los grupos de ciudadanos que deseen establecer cooperativas comunitarias;

- ofrecer otros servicios especializados a cualquier grupo social de la comunidad que, careciendo de los conocimientos especializados, tuviera interés en establecer y dirigir esas empresas démicas (por ej. los trabajadores de empresas en quiebra, desempleados, personas con remuneraciones bajas, etc.). De todos modos, hoy está muy difundida la descentralización de la información. Por ejemplo, en Emilia-Romanía, Italia, se ha creado una red completa con centros que ofrecen servicios especializados a las pequeñas empresas (desde comercialización hasta investigación industrial, etc.), mientras en Japón, con el sistema de Kohsetsushi, cada ciudad dispone de su propio centro de investigación y tecnología aplicada para la pequeña empresa³⁵.

El *banco démico* podría emprender la investigación sobre el tipo de centros de producción que habría que establecer en la comunidad local. Es obvio que la iniciativa privada no podría encargarse ni de la coordinación de los programas de inversión ni de la labor de investigación de los sectores en los que deberían crearse los nuevos centros, puesto que ese trabajo exige un conocimiento general de datos y necesidades económicas. De cualquier manera, la causa fundamental del carácter desigual del desarrollo capitalista es la naturaleza fragmentaria de la inversión privada. Por lo tanto, la investigación sobre los centros concretos de producción hacia los que debería dirigirse la inversión local así como sobre su distribución geográfica (es decir las posibilidades de las economías locales de emprender su materialización) en una primera etapa podrían realizarla los centros de investigación de la red de bancos démicos y, en una etapa posterior, la confederación de las comunidades. Sin embargo, los criterios que deberían aplicarse en este programa de investigación no tendrían que ser los estrechos criterios económicos tecnocráticos basados en la eficiencia, sino criterios que sirvieran para elevar al máximo el empleo local y la productividad e independencia económica local (y por consiguiente confederal) así como para la reducción al mínimo de los efectos en el medio ambiente. Así que tiene que introducirse algún tipo de evaluación social de la inversión y una contabilidad social para evaluar las propuestas concretas de inversión, supervisarlas y evaluar en general la creación de riqueza social. Eso quiere decir que habrán de utilizarse nuevos indicadores económicos, basados en los que ya se han elaborado³⁶, en lugar de los índices actuales de bienestar social. Por último, el banco démico debería prestar servicios especializados para planificar la composición de la producción, hacer el proyecto de la fábrica, capacitar a la mano de obra, establecer sistemas de contabilidad, etc.

Con respecto a la pregunta de cómo deberían dirigirse estas empresas démicas en el período de transición, pienso que deberían excluirse formas de autogestión como el tipo yugoslavo de cooperativa y el Employee Stock Ownership Plan (ESOP [Plan de Cartera de Acciones para Empleados], el primero proclive al socialismo de Estado y el segundo a la economía de mercado. En el sistema yugoslavo de autogestión, toda inversión de capital era propiedad del Estado y no de la empresa misma. Por lo tanto, los trabajadores no tenían ningún incentivo para invertir en la base de capital de la fábrica y, en consecuencia, la productividad se vio muy perjudicada. Por el otro lado, en el PCAE, tenemos un sistema indirecto de propiedad de los trabajadores, basado en un plan de pensiones para los empleados, y no una democracia en el lugar de trabajo. Por ejemplo, el voto depende de las acciones que tiene cada empleado y no del criterio democrático de 'una persona un voto'. Por lo tanto, todo el sistema termina siendo una sociedad anónima capitalista perfecta y la única diferencia con las demás compañías es que este sistema convierte a los trabajadores en capitalistas accionistas.

Las empresas démicas no deberían recrear la estructura burocrática de las cooperativas socialistas ni ser indistinguibles de las compañías capitalistas. De modo que,

aparte de la propiedad (que pertenece al demos y no a los capitalistas o al Estado) toda la estructura y manera de funcionar de las empresas debería ser distinta de la de las empresas capitalistas y socialistas de Estado. Por lo tanto, debería haber tanta descentralización como fuera posible, para evitar la burocratización y garantizar toda la autonomía posible para las personas que trabajan en ellas, dentro de los límites fijados por los objetivos de la comunidad.

Por eso, quizá la mejor solución sea la descentralización de la toma de decisiones, en el marco de cooperativas propiedad de la comunidad pero dirigidas de manera independiente. En otras palabras, la asamblea de la comunidad podría determinar metas sociales y ecológicas que la empresa démica tendría que alcanzar (por ej. la proporción del ingreso que se dejará aparte para el logro de los objetivos sociales y ecológicos de la comunidad, las normas ecológicas que habrán de respetarse, la seguridad del empleo, etc.), mientras que la empresa en sí podría ser dirigida como, por ejemplo, una cooperativa de Mondragón, con algunos ajustes importantes para que sus estructuras sean democráticas. Una manera posible de lograr este alto grado de descentralización en la toma de decisiones sería, por ejemplo, que las asambleas de la comunidad arrendaran empresas démicas para colectividades de empleados.

En lo que respecta en particular a la estructura de la gestión, el problema normalmente se plantea en términos de un conflicto entre la eficacia de la gerencia y la democracia de los empleados. En la cooperativa del tipo de Mondragón, se hace más hincapié en la eficacia que en la democracia, con una asamblea general que desempeña un papel limitado y elige sólo a la tercera parte de los miembros de una junta de supervisión que, a su vez, elige a los gerentes. Los gerentes dirigen eficazmente la empresa. La asamblea general de los trabajadores no se reúne más de una o dos veces por año. En una versión modificada, la asamblea general podría elegir a la mitad de los miembros de la junta de supervisión, para expresar los intereses de los empleados, mientras que la otra mitad podría ser elegida por la asamblea de la comunidad, para expresar el interés general de la comunidad. Los miembros de la junta de supervisión deberían ser personas con conocimientos específicos del tipo de actividad de producción de que se trate (ser capaces efectivamente de supervisar a los gerentes) y deberían poder ser destituidos de su cargo por las asambleas respectivas. A su vez, la junta de supervisión elegiría y supervisaría al personal de la gerencia, que estaría compuesto por personas con conocimientos especializados acordes con la actividad de que se trate. Por lo tanto, su autoridad provendría de su conocimiento, lo que implica que no se toleraría ningún poder jerárquico fuera de la influencia derivada de su conocimiento. Por último, la asamblea del lugar de trabajo, que debería reunirse con mucha más frecuencia que la asamblea general de Mondragón, determinaría cuáles decisiones debería tomar y cuáles debería delegar a la junta de supervisión y a la gerencia para que haya equilibrio entre eficacia y democracia.

Sin embargo, no se debe olvidar que este tipo de empresa démica es útil sólo para un período de transición, hasta que la economía esté totalmente municipalizada. Esto se debe a que tiene un serio inconveniente: a pesar de las modificaciones propuestas para satisfacer el interés general, el hecho mismo de que, en un sistema de economía de mercado, estos centros estén bajo una constante presión de competencia con las empresas capitalistas significa que el interés particular de los empleados tendería a pasar por encima del interés general de la comunidad. Es por esto por lo que una condición previa importante para la creación y el funcionamiento social de estas cooperativas es el espíritu comunitario; por lo tanto, los miembros de las empresas démicas deberían tenerlo. Otro asunto importante con respecto a las empresas démicas es que pueden no ser capaces de sobrevivir a la competencia, especialmente de las empresas

capitalistas que gozan de grandes economías de escala y considerables costos diferenciales de la productividad. Sin embargo, pienso que este asunto perderá una parte apreciable de su importancia en una economía independiente, en la que las empresas démicas dirigen su actividad productiva principalmente al mercado local. Esto es particularmente cierto si tomamos en consideración que la responsabilidad y la satisfacción social que la independencia y el control democrático aumentan son garantías de la calidad del producto. Además, sería dable esperar que las nuevas instituciones políticas y económicas crearan una nueva conciencia que haga a los ciudadanos más resistentes a los incentivos puramente económicos.

Por último, una condición importante que diferenciaría las empresas démicas de las cooperativas del tipo de las de Mondragón y las convertiría en verdaderos centros de producción de transición a una democracia inclusiva es que producirían exclusivamente para el mercado local, utilizando los recursos locales. En cambio, si empiezan a producir para el gran mercado externo, como están haciendo, por ejemplo, las cooperativas de Mondragón en este momento, se iniciaría un proceso que terminaría con su absorción en la economía de mercado, aunque formalmente se las siguiera llamando cooperativas. Así, en el caso de Mondragón, como hace notar incluso un entusiasta partidario de esas cooperativas, las presiones en relación con la competencia que se crearon con la integración de España en la UE han llevado a 'fortalecer la integración de grupos cooperativos para hacerlos resistir mejor la competencia de las empresas transnacionales, lo que extendió el sistema de cooperativas al por menor, que tan buenos resultados ha dado, más allá de la región vasca, en empresas conjuntas con otras cooperativas y con organizaciones sin fines de lucro que tal vez no permiten a los trabajadores hacerse miembros inmediatamente, lo que aumenta las diferencias de los salarios más elevados dentro de las cooperativas para atraer a técnicos y gerentes especializados'³⁷, etc.

Por lo tanto, es obvio que para que las empresas démicas tengan éxito deberían formar parte de un programa general para municipalizar la economía; en otras palabras, un programa cuyos elementos constitutivos sean la independencia, la propiedad démica y la asignación de recursos en el plano de la comunidad. El objetivo de este proceso es ir sacando gradualmente de la economía de mercado cada vez más recursos humanos y no humanos para pasarlos a la nueva economía 'démica' que constituiría la base de una democracia inclusiva. Al final de este proceso, las empresas démicas controlarían la economía de la comunidad y estarían integradas en la confederación de comunidades, que entonces podrían comprar o expropiar las grandes empresas de propiedad privada.

La transición a una asignación confederal de recursos

La dificultad fundamental de la estrategia que conduce a una asignación confederal de recursos es la manera de crear los ordenamientos institucionales para la democracia económica que sean compatibles con una estructura institucional que aún es una economía de mercado. Según fue descrita la asignación confederal de recursos en el capítulo anterior, el sistema supone dos mecanismos básicos para la asignación de recursos: a) un mecanismo de planificación democrática para la mayoría de las decisiones macroeconómicas y b) un sistema de vales para la mayoría de las decisiones microeconómicas. El sistema de vales crea, en efecto, condiciones de libertad de elección al reemplazar el mercado real por uno artificial. Es obvio que el sistema de vales no puede introducirse hasta que esté en vigencia una democracia económica plena organizada en una confederación de comunidades, aunque puedan tomarse antes algu-

nas medidas en ese sentido, como vimos anteriormente. Sin embargo, un sistema de planificación democrática podría introducirse incluso en el período de transición aunque, obviamente, la economía de mercado limitaría seriamente el alcance de la toma de decisiones. No obstante, podría desempeñar un papel de utilidad en lo que respecta a educar a la gente en materia de democracia económica y, al mismo tiempo, en lo que respecta a crear las condiciones previas para la autonomía individual y social.

Pero para que cualquier mecanismo democrático tenga importancia y atraiga a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, se presupone que las decisiones mismas son importantes. El caso de la Atenas clásica demuestra que, siempre que esta condición se cumpla, es perfectamente factible atraer a miles de personas para que ejerzan sus derechos cívicos. Así, como observa Hansen, 'el nivel de actividad política puesta de manifiesto por los ciudadanos de Atenas no tiene parangón en la historia mundial, en lo que se refiere a la cantidad, la frecuencia y el grado de participación... a una reunión de la Asamblea asistían normalmente 6.000 ciudadanos (de los 30.000 ciudadanos varones mayores de dieciocho años), en un día de tribunal normal se sorteaban unos 2000 ciudadanos y además de los 500 miembros del Consejo había 700 magistrados más'³⁸. Por lo tanto, es fundamental que durante la transición a una democracia inclusiva se otorguen al *demos* poderes importantes que la conviertan en un sistema coherente de tributación, gasto y finanzas locales. Luego, se podría dar poder a las asambleas de la comunidad (o asambleas de barrio, en las grandes ciudades, confederadas en una asamblea de la comunidad) para que tomen decisiones que afecten a la vida económica de la comunidad, las que pondría en práctica el Consejo municipal o algún otro órgano pertinente, tras haber sido convertido en un órgano de delegados destituibles.

Así, el traspaso del poder de fijar impuestos a los municipios, que debería ser una exigencia esencial de un movimiento democrático, permitiría a las asambleas de la comunidad determinar el monto de los impuestos y la manera en la que gravarían los ingresos, la riqueza, la tierra y el uso de energía, así como el consumo. Las asambleas de la comunidad podrían reunirse a intervalos anuales y discutir diferentes propuestas sobre el porcentaje de los impuestos para el año siguiente, en relación con la manera en que habría que gastar el dinero recaudado por el municipio. De este modo, las asambleas de la comunidad empezarían a tomar el poder fiscal del Estado, en lo que se refiere a sus comunidades, aunque en el período de transición, hasta que la confederación de comunidades sustituya al Estado, estarían también sujetas al poder fiscal del Estado.

Pueden tomarse medidas similares con respecto a los poderes que tiene actualmente el Estado en lo que atañe a la asignación de recursos económicos. La introducción de un sistema bancario démico, en combinación con monedas démicas, dará un poder importante a las asambleas de la comunidad para determinar la asignación de los recursos económicos en la puesta en práctica de los objetivos de la comunidad (crear nuevas empresas, cumplir las metas ecológicas, etc.).

Por último, las asambleas tendrían importantes poderes en lo que respecta a determinar la asignación de recursos en el sector municipalizado de la comunidad, a saber: las empresas démicas y el sistema démico de bienestar social. Como primera medida, las asambleas de la comunidad podrían introducir un sistema de vales para los servicios sociales. En una etapa posterior, cuando un número considerable de comunidades se hayan unido a la confederación de democracias inclusivas, las asambleas de la comunidad podrían ampliar el sistema de vales para cubrir las necesidades básicas de todos los ciudadanos, en un principio paralelamente a la economía de mercado, hasta que ésta haya desaparecido.

Al concluir este capítulo, nadie debería hacerse ilusiones de que la puesta en práctica de una estrategia de transición a la democracia económica no pasará por momentos difíciles a causa de las élites que controlan el aparato del Estado y la economía de mercado. Sin embargo, siempre y cuando se haya elevado el nivel de conciencia de la mayoría de la población para suscribir los principios incluidos en un programa en favor de una democracia inclusiva -y a la mayoría de la población le conviene desde todo punto de vista apoyar un programa de ese tipo hoy en día- pienso que las propuestas que anteceden son perfectamente viables, aunque, por supuesto, puede haber considerables variaciones de un país a otro y de una región a otra, según las condiciones locales. Sin subestimar las dificultades que entraña el contexto de los métodos todopoderosos actuales de control ideológico y violencia económica que, de hecho, podrían resultar más eficaces que la simple violencia del Estado en lo que respecta a reprimir un movimiento en favor de la democracia inclusiva, pienso que la estrategia propuesta para construir una nueva sociedad es realista.

Notas

1. Peter Marshall, *Nature's Web, an Exploration of Ecological Thinking*, Simon & Schuster, Londres, 1992.
2. Véase, por ejemplo, David Pepper, *Eco-Socialism: From Deep Ecology to Social Justice*, Routledge, Londres, 1993, p. 199.
3. Por una descripción gráfica del reclutamiento de guardias privados pertenecientes a las clases bajas para "tratar" con los activistas Verdes que protestaban en contra de la destrucción parcial de un bosque para que se pudiera construir la carretera de circunvalación de Newbury en Gran Bretaña, véase John Vidal, *The Guardian*, 25 de junio de 1996.
4. Véase Ted Trainer, *The Conserver Society: Alternatives for Sustainability*, Zed Press, Londres, 1995.
5. Ted Trainer, *The Conserver Society*, p. 220.
6. Murray Bookchin, "Libertarian municipalism: an overview", *Society and Nature*, vol. 1, Nº 1, 1992, p. 102.
7. Murray Bookchin, "Communalism: the democratic dimension of anarchism", *Democracy and Nature* (antes *Society and Nature*), vol. 3, Nº 2, 1996.
8. Murray Bookchin y Dave Foreman, *Defending the Earth, A Debate Between Murray Bookchin and Dave Foreman*, Black rose Books, Montreal, 1991, pp. 61-62.
9. Murray Bookchin, "Libertarian municipalism: an overview", p. 102.
10. David Pepper, *Eco-Socialism*, p. 200.
11. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, South End Press, Boston, 1995, p. 25.
12. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, pp. 8-9.
13. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 25.
14. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 9.
15. Véase la crítica de Janet Biehl del libro de Kirkpatrick Sale, *Rebels Against the Future: The Luddites and Their War on the Industrial Revolution, Lessons for the Computer Age*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1995, en *Green Perspectives*, Nº 36, febrero de 1996, p. 8.
16. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 12.
17. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, pp. 138-140.
18. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, pp. 14-15.
19. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 22.
20. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 144.
21. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 161.

22. Takis Fotopoulos, "The economic foundations of an ecological society", *Society and Nature*, vol. 1, Nº 3, 1993.
23. David Pepper, *Modern Environmentalism*, Routledge, Londres, 1996, p. 321.
24. Howard Hawkins, *The Greens Bulletin*, abril de 1992, pp. 27-30.
25. Murray Bookchin, *Post-Scarcity Anarchism*, Wildwood House, Londres, 1971, p. 217.
26. Cornelius Castoriadis, *Philosophy, Politics, Autonomy*, Oxford University Press, Oxford, 1991, p. 204.
27. Véase Murray Bookchin, "The ghost of anarcho-syndicalism", *Anarchist Studies*, vol. 1, Nº 1, primavera boreal de 1993.
28. Mencionaría, a título indicativo, las importantes obras de James Robertson sobre el tema; véase, por ejemplo, su artículo "Economics of local recovery", en *Society and Nature*, vol. 1, Nº 1, 1992 y su libro *Future Wealth*, Cassell, Londres, 1989, cap. 5. Véase también Paul Ekins, *Trade for Mutual Self-Reliance*, TOES Publication, Londres, 1989, *Local Economic Self-Reliance*, TOES Publication, Londres, 1988; la contribución de Johan Galtung en *The Living Economy*, Paul Ekins (ed.), Routledge & Kegan Paul, Nueva York, 1986, pp. 97-109 y C. George Benello et al., *Building Sustainable Communities*, Bootstrap, Nueva York, 1989, cap. 18-20.
29. Véase, por ejemplo, el Homegrown Economy Project de la ciudad de Saint Paul, Minnesota, que menciona James Robertson, en el que se utiliza cierto número de criterios generales para mejorar la economía local en el proceso de fundación de nuevas empresas y apoyo de las viejas (J. Robertson, *Future Wealth*, Cassell, Londres, 1989, p. 43) y experiencias similares en Boloña, Bremen, etc., que mencioné en otras partes, por ejemplo, *Eleftherotypia*, 22 de setiembre de 1990.
30. Por una descripción del sistema LETS, véase Ross V. G. Dobson, *Bringing the Economy Home from the Market*, Black Rose, Montreal, 1993.
31. Murray Bookchin, "Comments on the international social ecology network gathering and the 'deep social ecology' of John Clark", *Democracy and Nature* vol. 3, Nº 3, 1996.
32. Takis Fotopoulos, *Dependent Development: The Case of Greece*, Exantas Press, Atenas, 1985 y 1987.
33. Por ejemplo, en las comunidades aborígenes de Australia, pero también en el Reino Unido donde se creó un asentamiento de planificación y construcción propia en Shropshire. Por más datos sobre los fideicomisos de tierras de la comunidad, véase c. George Benello et al., *Building Sustainable Communities*, 1ª parte.
34. Véase M. A. Lutz y K. Lux, *Humanistic Economics*, Bootstrap, Nueva York, 1988, pp., 263-268.
35. Véase Will Hutton, *The Guardian*, 1º de junio de 1992.
36. Véase, por ej., V. Anderson, *Alternative Economic Indicators*, Routledge & Kegan Paul, Nueva York, 1991.
37. Roy Morrison, *Ecological Democracy*, p. 154.
38. Mogens Herman Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Blackwell, Oxford, 1991, p. 313.

Tercera parte

Hacia un racionalismo democrático